

BH 161C

R

A l Señor Embajador de los

Estados Unidos de Norte América

Sr. Raul Castro

PRESENTE

ARGENTINA PROJECT (S200000044)

U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS

Margaret P. Grafeld, Director

(☒) Release (☐) Excise (☐) Deny

Exemption(s):

Declassify: (☐) In Part (☐) In Full

(☐) Classify as (☐) Extend as (☐) Downgrade to

Date Declassify on Reason

De nuestra mayor consideración:

Las que suscribimos, somos representantes de las madres, esposas, hijas, abuelas, mujeres de toda edad, que desde hace meses y en algunos casos años, venimos recorriendo las oficinas de los diversos organismos de seguridad, los estrados de los juzgados, las cárceles del país, en procura de establecer el paradero de nuestros hijos o demás familiares detenidos, unos en sus domicilios; otros en sus lugares de trabajo, otros en la vía pública, sin explicación alguna, sin dar motivación para sus detenciones o secuestros; sin que se haga saber a sus familias el lugar de su detención, sin que se les permita comunicarse de manera alguna con el mundo exterior.

Nuestros familiares solo forman un pequeño grupo entre los miles de habitantes de la Argentina que han sido así arbitrariamente privados de su libertad, mantenidos incomunicados durante meses y años,

y tenido a sus familiares más cercanos en la más cruel ignorancia con respecto a su destino.

Tememos que muchos de los detenidos hayan sido asesinados sin forma alguna de juicio. La aparición esporádica de algunos cadáveres nos obliga a abrigar tales temores. Pero también la esporádica libertad de algunos desaparecidos, nos permite alentar la esperanza de que muchos de nuestros parientes vivan y puedan, aún, algún día recuperar su libertad.

Sabemos por los liberados que, en los lugares donde han estado meses y aún más de un año, existen centenares de arrestados, que desde largo tiempo están privados de su libertad y sin poder comunicarse con los suyos. Sabemos también de las condiciones inhumanas en que transcurren sus días, sus meses, sus años. Esposadas las manos, engri-llados los pies, vendados los ojos, durmiendo en colchonet-
tas colocadas sobre el piso, mal alimentados, sin poderse higienizar, sin poder comunicarse con ser humano alguno, sin poder mantener el menor contacto con su entorno, llevando una vida puramente vegetativa, infrahumana.

Tal tratamiento, que sintéticamente y sin enfatizar dejamos relatado, implica un total desconocimiento de los

derechos humanos, aprobado por las Naciones Unidas, y del Artículo 18 de la Constitución Nacional, que determina que; nadie pueda ser detenido sin orden de Autoridad competente, ni condenado sin el debido proceso legal; que establece que "las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reclusos en ellas". Tal tratamiento, repetimos, impone gravísimas lesiones a los familiares de los detenidos, que viven permanentemente angustiados al ignorar el destino de sus seres más queridos.

Ninguna existencia impuesta por la necesidad de defender a la sociedad, del terrorismo o la subversión, puede explicar esta conducta.

Las leyes argentinas establecen pautas que deben bastar para la adecuada defensa del Estado. Rige en el país el Estado de Sitio, que permite al Presidente mantener arrestado a quien quiera, aún sin proceso.

El Gobierno Militar encaramado en el poder el 24 de Marzo de 1976, ha reformado las leyes penales y procesales haciéndolas más severas. Se ha implantado pena de muerte para los que incurren en actos de subversión, no obstante establecer el artículo 18 de la Constitución, que la pena de muerte por razones políticas queda para siempre be

rrada de la legislación penal argentina. Se han creado nuevas formas de delitos, Se han aumentado las penas para toda una serie de delitos. Se ha establecido la jurisdicción de los tribunales militares, autorizándose la creación de Consejos de guerra especiales para juzgar a los llamados "subversivos". Se ha autorizado a las fuerzas armadas y a la policía para actuar como instructores, pudiendo allanar domicilios y mantener incomunicados durante muchos días a quienes resulten sospechosos.

No se entiende así, porque ni para que, el propio Estado necesita violar la discutible legalidad de las normas punitivas que él mismo ha creado en los dos últimos años, suprimiendo la defensa en juicio, sometiendo a prisión indefinida a las personas, sin darles oportunidad de defenderse, aislándolos "sine die" de sus familiares y del mundo, imponiendo tratamientos inhumanos, recurriendo con frecuencia, a la tortura y a la vejación. Con el riesgo de negar toda posibilidad de defensa a los sospechosos, de que reciban este trato inhumano, quienes han incurrido en violaciones de la ley y los que son inocentes de toda falta.

La Declaración de los Derechos Humanos es ley internacional. Obliga a todos los Estados miembros de las Na-

ciones Unidas a su estricto cumplimiento, dentro de sus propias fronteras. Obliga también a cada uno de los Estados Miembros a procurar su cumplimiento más allá de sus propias fronteras.

No reclamamos sanciones para el Gobierno que hoy domina en el país de los argentinos. Mucho menos sanciones para nuestra Patria Argentina. Reclamamos solamente de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos de Norteamérica por su gravitación y tradición, en primer lugar, que agoten los recursos a su alcance, para lograr que los Derechos Humanos vuelvan a ser respetados en nuestro país.

En síntesis, reclamamos la aparición de los miles de desaparecidos antes y después del 24 de marzo de 1976.

Reclamamos que, quienes resulten sospechosos o culpables de haber transgredido la ley, sean debidamente juzgados, se les permita atender la libre defensa de sus derechos, se les escuche en el debido proceso legal y que luego se les absuelva o se les condene, según resulte de los respectivos juicios. Y reclamamos el derecho de poder saber dónde están nuestros hijos, esposos, padres y nietos y poder visitarlos en las condiciones de seguridad que establezca la autoridad

de aplicación.

Aunque las firmantes somos parientes solamente de personas desaparecidas, no podemos dejar de poner en conocimiento del Señor Embajador otros hechos que se vinculan a la violación de los Derechos del Hombre.

En primer lugar nos referimos a la situación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Es cierto que el artículo 23 de la Constitución autoriza al Presidente a detener a cualquiera persona, si esta no prefiriese salir del territorio argentino. Este derecho de opción fué suspendido por la Junta Militar por un acta constitucional de marzo de 1976.

Fué formalmente restablecido por el acta ~~institucio~~-
nal del 1 de setiembre de 1977. Pero la ley 21650 que reglamenta su ejercicio, ha convertido en puramente teórico dicho restablecimiento. Efectivamente la ley establece que solo tres meses después de puesta una persona a disposición del Poder Ejecutivo, podrá solicitar la salida del territorio. El Presidente de la Nación tendrá ciento veinte días para resolver la solicitud. Y es de su privativo criterio, sin posibilidad de revisión por órgano judicial alguno, el hacer lugar o no a la solicitud para salir del

territorio. Si la resolución es negativa, el detenido deberá esperar un nuevo lapso de tres meses para presentar una nueva solicitud, la cual podrá ser aceptada o rechazada indefinidamente por el Presidente de la Nación. Con el agravante que ahora, para iniciar todo trámite, es imprescindible presentar un certificado de una embajada acreditada ante el Gobierno, que acredite que el solicitante será recibido en el país cuyo embajador extiende el certificado. No necesitamos subrayar ante el Señor Embajador que ninguna embajada extiende tales certificados "in abstractus". La condición de la obtención previa del certificado diplomático, es una condición de cumplimiento imposible, que ha tornado impracticable, desde la sanción de la ley citada, la presentación de solicitudes para salir del país.

Son así millares los habitantes que deberán permanecer en las cárceles, sin forma alguna de juicio, indefinidamente, a la espera de que el Presidente, por un acto de gracia puramente voluntario, y por lo tanto, arbitrario, quiera dejar sin efecto la orden de detención.

Son así millares los habitantes que están condenados a prisión, por tiempo indeterminado, por la sola voluntad del Presidente, en violación de normas expresas de la Cons-

titución (arts.18,23 y 95) y de la Declaración de los Derechos Humanos.

No queremos fatigar la atención del Señor Embajador, relatándole cuál es la situación en que viven los detenidos en las cárceles de la República, en malas condiciones de higiene, mal alimentados, sin recibir la debida atención médica, sin poder recibir periódicos, ni estudiar ni trabajar. Y ello por meses y por años, indefinidamente.

No queremos tampoco fatigar al Señor Embajador con el relato de las torturas a que son sometidos los detenidos, para lograr confesiones ni de los malos tratos que son objeto constantemente en las prisiones, con meros pretextos disciplinarios.

Si se obtuviera autorización, para que una comisión imparcial, visitara los presidios e interrogara, con las debidas garantías, a los internos en ellos, las comprobaciones a que llegaría dicha comisión, sacudiría la conciencia universal.

No quisiéramos tampoco mencionar las docenas de abogados que, por haber tratado de asegurar la defensa libre en juicio de los procesados, han sido asesinados, han desaparecido, o han debido emigrar. La prensa mundial ha informado reiteradamente de estos casos.

Sabemos que el Gobierno alega que tales abusos de derecho, que ya no se puede ocultar, son labor de bandas incontroladas. La argumentación es pueril, las prisiones están bajo el control directo del Estado. Y los "desaparecidos" que luego aparecen, atestiguan la existencia de grandes establecimientos, con luz eléctrica, amplios espacios, servicios sanitarios, teléfonos y comunicaciones de circuito cerrado, que no pueden funcionar en un país, que no tiene desiertos ni zonas fuera del control del Estado, sin que el mismo Estado las conozca, las organice y las apañe.

Llegamos a Vd. Señor Embajador, para que se haga eso del dolor de miles de perseguidos sin causa, de miles de hogares deshechos, de miles de procesados, tal vez culpables, que no reciben el debido proceso legal, ni el trato humano que merece, según la palabra del Pontífice Pío XII, "el más abyecto de los delincuentes".

Lo hacemos con la esperanza de que la palabra de los Estados Unidos, pública o secreta, puede llevar al Gobierno a rectificar rumbos, a paliar dolores, a restañar heridas, a restablecer, para nosotros y para nuestra posteridad, como quiere la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de la Nación Argentina, "LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD".

